

Exclusión educacional: ¿una forma de control político?

Por José Viacava G.*

Desde ya, quiero agradecer la invitación a este significativo evento, enmarcado en el segundo seminario de la Universidad Arcis en la ciudad de Valparaíso. Y permítanme indicar que éste sólo hecho ya representa por si sólo una doble emoción para quien habla. En primer lugar, porque soy porteño. Junto a mi familia nací, crié y me eduqué en uno de los cerros de este puerto. Y en segundo lugar, porque estoy junto a estudiantes y colegas del mismo gremio en el cual participo.

Dicho esto, advierto que mis opiniones estarán salpicadas de un revisionismo académico en una primera parte, pero a la vez, de una presentación y postura ideológica en razón de mi trabajo cotidiano en el segundo acápite de mi presentación.

En primer lugar, cuando hablamos de exclusión educacional, lo que sugiero es que enmarquemos bien el contexto en el cual nuestro discurso se cristaliza.

Como tema de interés público, la educación se ha transformado en un asunto recurrente al cual apelan las autoridades, gobiernos y organismos multilaterales, situándolo como la llave maestra para los problemas de sub-desarrollo, crecimiento económico y modernidad. De hecho, en el último informe entregado por el Banco Mundial en su reunión celebrada en Singapur en Septiembre, se recomienda como primera medida que los Estados en desarrollo inviertan en mejorar su educación porque es una garantía para un pujante crecimiento económico y para reducir marcadamente la pobreza¹.

Localmente, en el segundo trimestre de este año, los chilenos vivimos una experiencia distinta que hacía décadas no presenciábamos: hablo de las demandas de los estudiantes secundarios.

* Licenciado y Magíster en Ciencia Política. Profesor Universidad Diego Portales.

¹ <http://www.bancomundial.org/>

Esta “revolución pinguina” para mi forma de ver (siguiendo en parte a Sydney Tarrow²), tiene todas las características de un movimiento social. Es decir, surge como una demanda informal, no institucionalizada en los clásicos canales de agregación y articulación de intereses, promovida por un decidido carácter colectivo de espontaneidad.

Además, desde el primer instante los estudiantes aparecieron en contraste con los partidos e instituciones políticas, porque adoptaron acciones políticas no-convencionales y rupturistas del “sistema”.

Inclusive, con el paso de los meses, cada vez más reafirman su carácter de movimiento social, porque –según lo argumenta Melucci (profesor de Sociología Cultural y Psicología Clínica en la Universidad de Milán)-, han radicalizado su comportamiento llegando a extender el conflicto más allá de los límites de compatibilidad del sistema para resolverlo, rompiendo con las reglas del juego, destacando objetivos no negociables, cuestionando la legitimidad de las decisiones.

Pero, este movimiento social “*a la chilena*” tiene particularidades. Si bien, la teoría indica que este tipo de manifestaciones sociales carecen de conexiones con la élite, claramente sus demandas han contado o perseguido allanar la simpatía de éstas a sus presiones.

En síntesis, a pesar de la aparente novedad y sorpresa que significó para nuestro país este proceso de movilización social que aún se desarrolla, lo cierto es que nada tiene de nuevo. Porque, a pesar de la conceptualización que se ha hecho sobre los movimientos sociales -preferentemente desde marcos cognitivos y discursivos modernizadores, europeos y occidentalizantes-, lo cierto es que esas categorías no pueden ser replicadas en un 100% en América Latina.

Por ejemplo, el estudio histórico de los movimientos sociales los caracteriza como procesos de irrupción en sistemas normados e institucionalizados. Es decir, toda aquella agregación de intereses y demandas no articuladas

² Tarrow, Sydney: El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Alianza, Madrid, 1997

correctamente puede ser una expresión de ellos. Sin embargo, esta teorización parte de la premisa que todos los contextos políticos están caracterizados siempre por el primado de la acción política institucional y en un marco político liberal-democrático.

Si ponemos en tela de juicio sólo este axioma, claramente los movimientos son una alternativa más de la democracia participativa en detrimento de la representativa liberal. Los movimientos serían una manifestación de la inconsistencia del sistema político para admitir irrupciones extra-institucionales.

Por lo tanto, hecha esta pequeña presentación acerca del cuadro en el que enmarco mis ideas, entonces, podremos comprender desde la educación -como sistema normalizador-, de mejor manera la relación que exhibiré entre exclusión social e identidad colectiva.

Como un primer punto, ensayo la idea que la inclusión es un discurso propio de sistemas donde ha primado la exclusión a determinados grupos sociales. Siguiendo la lógica de Sartori³ en otro aspecto como la cultura, la diversidad sólo es protegida y defendida allí donde está en peligro.

Si nuestra educación es hija del iluminismo y de la modernidad europea del siglo XVII y XVIII, la inclusión es la uniformidad de las diferencias. Las alteridades no tienen cabida en sistemas positivos y que apuntan al progreso de la humanidad.

David Hamilton (Profesor de la Universidad de Liverpool), en su estudio de la educación como producto de la Revolución francesa⁴, ha logrado identificar el origen del término currículo en la acción de algunos educadores empeñados en sistematizar el curso de estudios y convertirlo en una trayectoria más racional y ordenada para más sujetos. La idea moderna de "escuela", por otra parte, aparece en la modernidad temprana en contraposición a la educación del príncipe, guiada por un instructor y realizada en un marco principalmente doméstico y de la corte; en forma opuesta, la escuela elemental se dirige al

³ Sartori, Giovanni: La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y Extranjeros; Edit. Taurus; Madrid; 2001

⁴ <http://www.campus-oei.org/oeivirt/rie01a06.htm>

pueblo, implica un conjunto heterogéneo de sujetos, y aunque inicialmente puede tener lugar en una iglesia o establo, conocerá una especialización creciente, tanto de sus agentes como de sus locales⁵.

Incluso, Michel de Lepelletier uno de los más radicalizados de la Revolución Francesa propone que todos los niños de 5 a 12 años sin distinciones o excepciones sean educados a expensas de la República, y "que todos, bajo la santa ley de la equidad, reciban el mismo vestuario, la misma alimentación, la misma instrucción, el mismo cuidado". Los niños, educados en las "casas de la igualdad" — como se llamaría a estas instituciones educativas — serían los perfectos ciudadanos de la nueva sociedad. La igualdad, en un movimiento de asociación discursiva que perduraría al menos dos siglos, se volvía equivalente a la homogeneidad, a la inclusión indiscriminada e indistinta en una identidad común, que iba a garantizar la libertad y la prosperidad general. La manera en que la escuela procesó la diversidad que recibía en sus docentes y en sus alumnos fue homogeneizarla y uniformizarla⁶.

Por lo tanto, la inclusión puesta en perspectiva racional y positivista, es sinónimo de exclusión de aquellos otros diferentes; es una frontera donde el límite no acepta un reto a la identidad de la modernidad. Y esa identidad no es otra cosa que "seamos todos iguales, y esa igualdad se define no sólo por la abstracción legal de nivelarnos y equipararnos a todos los ciudadanos sino también porque todos nos conduzcamos de la misma manera, hablemos el mismo lenguaje, tengamos los mismos héroes y aprendamos las mismas cosas, entonces quien o quienes persistan en afirmar su diversidad serán percibidos como un peligro para esta identidad colectiva, o como sujetos inferiores que aún no han alcanzado el grado de civilización"⁷ que Francia y Europa pregonan.

Por lo tanto, la pregunta sobre la educación como sistema de exclusión social, entonces, debe ser reformulada y precisada en términos de interrogarnos cómo la igualdad elevada a principio y eje fundador de la modernidad, llegó a

⁵ Cf. Dussel, Inés: Inclusión y exclusión en la escuela moderna argentina: una perspectiva post-estructuralista; en <http://www.scielo.br/pdf/cp/v34n122/22507.pdf>

⁶ Idem

⁷ Idem.

articularse como discurso en un espacio y tiempo tan disímil como el contexto latinoamericano plagado de diferencias y discriminación.

Hay quienes señalan que estas diferencias estructurales han estado siempre presentes y que el liberalismo de nuestras elites se convirtió en la racionalización del sistema político, quien sería el encargado de proteger y defender la igualdad puesta en peligro por la alteridad. En este punto es donde la educación ha jugado un papel determinante porque ha subrayado la uniformización igualizante de las diferencias transformándolas en identidad.

Pero esta situación no se ha revertido. Las diferencias (por múltiples factores sociales y sico-colectivos) están presentes, latentes, pero vivas. Por lo tanto, manifestaciones como el movimiento estudiantil es un pequeño bostezo del gran elefante expectante.

Acerca de las diferencias presentes, un comentario que me parece ilustrativo: si para evitar la exclusión social por las apariencias y vestuarios, se estableció, primero en algunas escuelas y paulatinamente en todo el sistema educativo, que los niños debían ir a la escuela con un delantal blanco sobre sus ropas. Este uniforme, que se parece al que usan los médicos y enfermeras, tenía, además de fundamentos igualitarios y moralizantes, fines profilácticos, como prevenir la propagación de gérmenes y bacterias. En muchos otros casos, también este “uso” se ha extendido a los maestros. Se piensa hasta el día de hoy que el uniforme y el delantal cubre las diferencias y las borra instaurando una apariencia igualitaria a toda la población escolar⁸.

Por cierto que hubo una resistencia, aunque minoritaria, frente a este afán modernizante, identitario e inclusivo. Domingo Sarmiento (uno de los intelectuales más interesantes del siglo XIX en América Latina), estuvo en contra de estas prácticas homogeneizantes, en lo particular, la estética a través del vestuario. Para él, esta medida excluye aun más, porque significa un gasto extra para las familias más pobres. Y esto me recuerda lo que a veces sucede con algunas escuelas, colegios y universidades, donde parten de un sustrato igualitario al inicio del año académico, pero las diferencias y exclusiones se

⁸ Ibid.

marcan en el desarrollo del ejercicio educativo a través de los materiales que se solicitan en el año, los aportes económicos para financiar actividades colectivas, etc.

Siguiendo a Foucault, el vestuario ejemplificado a través del guardapolvo blanco, como código de comportamiento y conducta se vincula a la autoridad y la prevalencia de un régimen disciplinario⁹, como diría Bettham, quizás el lado más oscuro de la educación moderna.

Hoy, la fuerza de la sociedad, ejemplificada en la denostación pública y rechazo colectivo a quienes “pierden” clases por estar “protestando”, o a quienes usan aros, metales o cadenas en sus uniformes, es una lucha desigual, porque el poder está hacia un solo lado. El *saber/poder* ha hecho del cuerpo un bien social, objeto de apropiación colectiva. En este sentido, las individualidades deben ceder a las identidades y el alumno representan en todo lados a la escuela y, con ella, a la sociedad. Por eso, se le castiga a quien se comporta de manera inadecuada, no cumple las reglas establecidas o infrinja daños al sistema. La identidad del educando representa ante todo el fin del cuerpo social. Por lo tanto, la educación en sistemas normalizados es la exclusión de la subjetividad, es la apropiación de las diferencias y la homogeneización de la identidad. Por lo tanto, la exclusión educacional como forma de control esta visible y es parte de sistemas liberales, democráticos, representativos y occidentales que provocan doble segregación: por un lado, para quienes afectan la identidad; y por otro, de aquellos que no califican en ella.

Como señalé al inicio, debo ahora realizar un segundo ejercicio y es la presentación de una postura ideológica en razón de mi trabajo cotidiano como radical y asesor legislativo.

Quiero ante todo advertir que a continuación mis palabras deben ser entendidas como un comentario personal de un trabajo que se ha desarrollado colectivamente y que por cierto no comprometen al Partido como institución.

⁹ Ibid.

Sobre educación, ustedes sabrán, el radicalismo tiene una lucha y defensa histórica. De hecho, en nuestro actuar hemos sido siempre defensores de la educación como responsabilidad ineludible del Estado. Así, participamos en la Ley de instrucción primaria obligatoria de los años 20`, fomentamos la educación técnico profesional y a la educación primaria, y luchamos por dividir la participación única que tenía la Iglesia en la educación en una bandera de acción política incansable que continúa hasta el día de hoy por hacer primar el laicismo por sobre el dogma. Nuestras últimas batallas han sido en la Ley de divorcio y actualmente en lo que atañe constitucionalmente a la responsabilidad del Estado en la educación y la desmunicipalización de la misma.

En este sentido, uno de los puntos más sensibles del conflicto estudiantil, ha sido la crítica situación que experimenta hoy la educación pública municipalizada, el rol constitucional que al Estado se le asigna y la necesidad de una mejor calidad, infraestructura y fiscalización de aquellos agentes privados que participan como sostenedores en educación.

Todos los sectores involucrados coincidieron durante la primera etapa del conflicto estudiantil, en una demanda que el PRSD ha venido proponiendo desde hace muchos años a la fecha, en orden a ejercitar una efectiva descentralización de la educación, superando el proceso de pauperización en la que se encuentra actualmente la educación pública municipalizada.

Además, para el radicalismo, un sistema inorgánico como el actual donde cohabitan tres tipos diferentes de gestión educativa (**privada, subvencionada y pública**), no ha hecho más que agregar deudas y problemas en una inversión cuyos resultados han sido deplorables según los resultados SIMCE y PSU.

Por lo tanto, acogiendo y respondiendo el llamado público de legislar sobre estas materias, el radicalismo tempranamente reaccionó a través de sus parlamentarios y en pleno conflicto estudiantil del mes de Mayo, los Diputados presentaron el único proyecto de ley que existe actualmente en el Parlamento para derogar una piedra angular hoy en la discusión pública: la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

En ese mismo sentido, los Senadores del PRSD presentaron al país dos proyectos de ley tendientes a desmunicipalizar la educación, transfiriendo esta ineludible tarea del Estado a las SEREMIs de Educación.

El Colegio de Profesores, conociendo las propuestas del PRSD en este sentido, hizo suyo por decisión de la Asamblea General de Agosto estos aportes convirtiéndose en una tarea de la cual el radicalismo es parte y presenta la voluntad legislativa de contribuir en un decidido debate parlamentario a mejorar nuestra educación, una vez que la Comisión Asesora presidencial entregue su informe final y el Ejecutivo envíe al Congreso las iniciativas más importantes a las cuales debe volcarse y que a nuestro juicio son:

- Derogar la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y discutir una nueva ley marco de Educación.
- Eliminar como responsabilidad municipal la educación.
- Radicarla en un nuevo sistema de administración que sea parte orgánica del sistema educativo nacional, preservando su coherencia interna. Este enfoque permitirá transferir esta responsabilidad, que hoy ejercen los Municipios, a nuevos organismos diseñados y regulados por la nueva Ley Orgánica Constitucional de Educación. Estos nuevos órganos tendrán como función esencial la planificación, gestión y administración del proceso educativo en el área geográfica correspondiente, disponiendo de la necesaria autonomía para su buen ejercicio.
- Incorporar estándares mínimos de calidad en materia de infraestructura, docencia y tecnología para toda la educación pública, fiscalizando fuertemente los aportes y recursos que el estado entrega a los sostenedores.
- Restituirle al Estado un rol constitucionalmente activo y garantizado en la educación, superando el principio de subsidiariedad con el que actualmente ha estado operando el sistema. Para estos efectos, en la discusión que hoy se desarrolla en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de Reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación, se presentarán indicaciones para potenciar la tarea que debe asumir activamente el Estado en educación, velando por la calidad de ésta, materializando y asegurando efectivamente el ejercicio de este derecho (modificación al Artículo 19, nº 10 de la C.P.R.).

Sólo así, creemos estar seguros y decididos en avanzar hacia un proceso más igualitario donde las diferencias que hoy no promueven ni alientan las particularidades (principio básico del racionalismo en el cual estamos fundidos y confiados en la capacidad libertaria del ser humano), puedan superar la asfixia que hoy ahonda y agudizada las necesidades. Estas últimas, deben ser reducidas de 345 realidades en virtud de los recursos que cada municipio puede disponer para educar a sus niños, a una estructura descentralizada más efectiva donde la gestión, administración y control quede en regiones y los lineamientos y estándares sean definidos nacionalmente.

En síntesis, si la exclusión en educación ha pasado por un sistema normalizado, los radicales creemos que antes debemos hacernos cargo de las diferencias que promueven esas inequidades (producidas por un diseño anacrónico e ineficiente), diseñando un plan total de acción que remedie esas debilidades y podamos paulatinamente en la perfección del ser, avanzar hacia un efectivo y concreto proceso de inclusión real y no cosmético, donde el guardapolvo ha sido la mejor expresión de la política actual.